



REPUBLICA ARGENTINA

# DIARIO DE SESIONES

## CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

52ª REUNIÓN — 21ª SESIÓN ORDINARIA  
7 DE DICIEMBRE DE 1994

Presidencia del señor presidente provisional del Honorable Senado,  
doctor **EDUARDO MENEM**,  
y del señor vicepresidente del Honorable Senado,  
don **ORALDO N. BRITOS**

Secretarios: doctor **EDGARDO RENÉ PIUZZI** y señor **EDGARDO P.V. MURGUÍA**

Prosecretarios: señor **JUAN JOSÉ CANALS** y doctor **DONALDO ANTONIO DIB**

**PRESENTES:**

**AGUIRRE LANARI, Juan R.**  
**ALASINO, Augusto**  
**BITTEL, Deolindo F.**  
**BORDÓN, José O.**  
**BRANDA, Ricardo A.**  
**BRAVO, Leopoldo**  
**BRITOS, Oraldo N.**  
**CABANA, Fernando V.**  
**CAFIERO, Antonio F.**  
**CENDOYA, Jorge J.**  
**COSTANZO, Remo J.**  
**DE LA RÚA, Fernando**  
**FADEL, Mario N.**  
**GENOUD, José**  
**HUMADA, Julio C.**  
**LAFFERRIÈRE, Ricardo E.**  
**LOSADA, Mario A.**  
**LUDUEÑA, Felipe E.**  
**MARTÍNEZ, Daniel E.**  
**MARTÍNEZ ALMUDEVAR, Enrique M.**  
**MASSAT, Jorge**  
**MAZZUCCO, Faustino M.**  
**MENEM, Eduardo**  
**MIRANDA, Julio**  
**OYARZÚN, Juan Carlos**  
**PEÑA de LÓPEZ, Ana M.**  
**RIVAS, Ofelia del Valle**

**RODRÍGUEZ SAÁ, Alberto J.**  
**ROMERO FERIS, José A.**  
**SÁNCHEZ, Libardo N.**  
**SAPAG, Felipe R.**  
**SOLANA, Jorge D.**  
**SOLARI YRIGOYEN, Hipólito**  
**STORANI, Conrado H.**  
**VACA, Eduardo P.**  
**VERNA, Carlos Alberto**  
**VILLARROEL, Pedro G.**

**AUSENTES, CON AVISO:**

**AVELÍN, Alfredo**  
**FIGUEROA, José O.**  
**JUÁREZ, Carlos A.**  
**MAC KARTHY, César**  
**SAN MILLÁN, Julio A.**  
**SNOPEK, Guillermo E.**

**EN COMISION:**

**LEÓN, Luis A.**  
**MOLINA, Pedro E.**  
**ROMERO, Juan Carlos**  
**RUBEO, Luis**

**POR ENFERMEDAD:**

**OTERO, Edison**

- del que es autor junto con el señor senador Branda por el que se crea el Consejo para el Crecimiento y Desarrollo Sostenible de las Economías Regionales (S.-2.145/93). (Pág. 5096.)
47. Consideración del dictamen de las comisiones de Agricultura y Ganadería y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de comunicación del señor senador Ludueña por el que se solicita un subsidio para la Municipalidad de Gobernador Gregores, Santa Cruz (S.-150/94). Se aprueba. (Pág. 5098.)
48. Consideración del dictamen de las comisiones de Ecología y Desarrollo Humano y de Combustibles en el proyecto de declaración del señor senador Caffero por el que se manifiesta preocupación ante la serie de episodios y situaciones de alto riesgo socio-ambiental producidos por la destilería La Plata de la empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales S.A. (S.-1.052/94). Se aprueba. (Pág. 5099.)
49. Consideración del dictamen de las comisiones de Asuntos Penales y Regímenes Carcelarios y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley en revisión y en el proyecto de ley del señor senador Villarroel por los que se modifican artículos del Código Aduanero (C.D.-41/94 y S.-294/94). Se aprueba el proyecto de ley en revisión. (Pág. 5100.)
50. Consideración del dictamen de las comisiones de Comercio y de Economías Regionales en el proyecto de comunicación de los señores senadores Bordón y Fadel por el que se solicita que el Instituto Nacional de Vitivinicultura realice controles durante el fraccionamiento de vino importado a granel (S.-1.239/94). Se aprueba. (Pág. 5102.)
51. Consideración del dictamen de las comisiones de Asuntos Administrativos y Municipales y de Asistencia Social y Salud Pública en el proyecto de ley del señor senador San Millán por el que se crea el Instituto Nacional de Epidemiología Regional (S.-846/94). Se aprueba. (Pág. 5103.)
52. Consideración del dictamen de las comisiones de Asuntos Administrativos y Municipales y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de comunicación del señor senador Solana por el que se solicita un subsidio para la Municipalidad de Villa La Angostura, Neuquén (S.-1.013/94). Se aprueba. (Página 5105.)
53. Consideración del dictamen de las comisiones de Asistencia Social y Salud Pública, de Familia y Minoridad y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de comunicación del señor senador Massat por el que se solicita un subsidio para la "Fundación Cuyo" (S.-536/94). Se aprueba. (Pág. 5106.)
54. Consideración del dictamen de las comisiones de Asistencia Social y Salud Pública y de Comercio en el proyecto de comunicación del señor senador Bravo por el que se solicita se aumenten los controles a los productos alimenticios (S.-348/94). Se aprueba. (Pág. 5106.)
55. A moción del señor senador Mazzucco se considera sobre tablas y se aprueba el proyecto de ley en revisión por el que se crea el Fondo de Emergencia Agropecuaria (C.D.-58/94). (Pág. 5107.)
56. A moción del mismo señor senador se considera sobre tablas y se aprueba el proyecto de resolución del señor senador León por el que se solicita se declare en emergencia sanitaria, agropecuaria y habitacional a la provincia del Chaco (S.-1.415/94). (Página 5108.)
57. Postergación de la consideración de varios proyectos referidos a la erección de un monumento a Carlos Gardel (S.-133/93, 435, 436 y 1.229/94). (Pág. 5109.)
58. Manifestaciones del señor senador Cendoya con respecto al proyecto de resolución a que hace referencia el punto 56 de este sumario. (Pág. 5109.)
59. A moción del señor senador Cabana se considera sobre tablas y se aprueba el dictamen de las comisiones de Familia y Minoridad y de Asuntos Penales y Regímenes Carcelarios en el proyecto de ley en revisión sobre protección contra la violencia familiar (C.D.-86/93). (Pág. 5110.)
60. A moción del señor senador Aguirre Lanari se considera sobre tablas y se aprueba el dictamen de las comisiones de Interior y Justicia y de Presupuesto y Hacienda, en el proyecto de ley en revisión por el que se crean dos salas en la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo (C.D.-57/94). (Pág. 5120.)
61. Moción del señor senador Bordón para considerar sobre tablas el proyecto de resolución del que es autor por el que se solicita diferir el pago de los haberes de determinado personal de los tres poderes de la Administración Pública Nacional hasta tanto se abonen las jubilaciones y pensiones correspondientes al mes de diciembre y el aguinaldo de 1994 (S.-1.479/94). Se rechaza. El proyecto pasa a la Comisión de Trabajo y Previsión Social. (Pág. 5121.)
62. Moción del señor senador Romero Feris para considerar sobre tablas el proyecto de comunicación del que es autor por el que se solicitan informes sobre el cumplimiento de la ley 24.308 respecto a la reubicación de los puestos callejeros pertenecientes a discapacitados que fueran desalojados de la zona de Once (S.-1.401/94). Se rechaza. El proyecto pasa a la Comisión de Asistencia Social y Salud Pública. (Pág. 5124.)
63. Consideración sobre tablas y aprobación del dictamen de la Comisión de Libertad de Expresión en dos proyectos de declaración: uno del señor senador Aguirre Lanari y otro del señor senador Romero Feris, por los que se manifiesta preocupación ante los incidentes que involucran a periodistas, ocurridos en las localidades de Larroque, Entre Ríos y San Isidro, Buenos Aires. (S.-1.437 y 1.438/94). (Página 5125.)

## II. Inserción (Pág. 5144.)

—En Buenos Aires, a las 17 y 21 del miércoles 7 de diciembre de 1994:

**Sr. Presidente (Menem).** — La sesión está abierta.

## 1

## IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

**Sr. Presidente (Menem).** — Invito al señor senador por Formosa doctor Ricardo Alberto Branda a izar la bandera y a los presentes a ponerse de pie.

—Puestos de pie los presentes, el señor senador Branda procede a izar la bandera nacional en el mástil del recinto. (Aplausos.)

## 2

## ASUNTOS ENTRADOS

**Sr. Presidente (Menem).** — Por Secretaría se va a dar cuenta de los asuntos entrados desde la última sesión, cuya nómina se hizo llegar oportunamente a los señores senadores. Este es el momento en que pueden hacer las observaciones que estimen pertinentes.

—La nómina de los asuntos entrados, con las observaciones formuladas, es la siguiente:

## I

Acuerdo para la promoción del señor contralmirante don Julio I. Lavezzi al grado inmediato superior, en el cuerpo comando. — Mensaje del Poder Ejecutivo

Buenos Aires, 7 de diciembre de 1994.

A la Honorable Cámara de Senadores de la Nación.

En cumplimiento de lo prescrito por el artículo 99, inciso 13, de la Constitución Nacional, tengo el agrado de recabar de vuestra honorabilidad, el acuerdo que determina, para promover al grado inmediato superior, en el cuerpo comando al señor contralmirante don Julio Italo Lavezzi (MI 5.170.576).

La promoción que se propone de conformidad con lo estatuido en la Ley para el Personal Militar, corresponde al año 1995, reuniendo el candidato las condiciones exigidas por dicha ley, la que se otorgará con antigüedad al 31 de diciembre de 1994.

Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Mensaje 2.161

CARLOS S. MENEM.  
Oscar H. Camilión.

## II

## Modificación de la ley 346. — Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo

Buenos Aires, 29 de noviembre de 1994.

Al Honorable Congreso de la Nación.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad a fin de elevar a su consideración el adjunto proyecto de ley por el cual se sustituyen los artículos 10 y 11 de la ley 346, modificada por las leyes 16.801 y 20.835.

La iniciativa tiende a establecer un sistema de publicidad anterior a la concesión de la ciudadanía para posibilitar un control que, en el caso, responda a la más pura concepción republicana, ya que es confiado a toda la ciudadanía, y sin que ello signifique, obviamente, prescindir de las seguridades que deben brindar los organismos técnicos específicos.

Ya en otros ordenamientos normativos se había previsto la publicidad de estos actos, pero se la había reservado para la sentencia de concesión, pérdida o cancelación de la ciudadanía y limitada al Boletín Oficial de la República Argentina.

Hoy aparece como más oportuno extender esa publicidad a órganos de prensa de difusión masiva y efectuarla en forma previa a la concesión.

Los informes que en consecuencia se pudieran recabar de los ciudadanos, o la concreta oposición a la concesión de la ciudadanía, serán diligenciados, o interpuesta, respectivamente, por intermedio del Ministerio Público Fiscal, de forma tal que el criterio jurídico de quien representa a la sociedad sirva como justo equilibrio frente a aquellas presentaciones que fueren manifiestamente improcedentes.

El costo de las publicaciones a cargo de los interesados no implica una excesiva onerosidad para quienes aspiran a obtener la ciudadanía argentina, ni constituye un obstáculo para la adquisición de tal honor, máxime ante la situación que padece el erario nacional.

La alteración del régimen de gratuidad establecido por la ley vigente debe considerarse una razonable reglamentación de la normativa constitucional que consagra la facultad de los extranjeros a naturalizarse.

Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Mensaje 2.082

CARLOS S. MENEM.

Carlos F. Ruckauf. — Rodolfo C. Barra.

## PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 1º — Sustitúyese el artículo 10 de la ley 346, modificada por las leyes 16.801 y 20.835, por el siguiente:

Artículo 10: La carta de ciudadanía, así como las actuaciones para obtenerla, serán gratuitas, salvo la excepción prevista en el artículo siguiente.

Los extranjeros podrán acreditar las circunstancias de edad y extranjería con la sola presentación de la cédula de identidad otorgada por la Policía Federal Argentina, o del pasaporte de su país originario visado por el consul argentino del lugar.

necesario corregirlo. Es una exageración del autor del proyecto. (*Risas.*)

**Sr. Branda.** — Siempre tan exagerados los radicales. (*Risas.*)

59

### PROTECCION CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR

**Sr. Presidente (Menem).** — Corresponde considerar el dictamen de las comisiones de Familia y Minoridad y de Asuntos Penales y Regímenes Carcelarios en el proyecto de ley en revisión sobre protección contra la violencia familiar, expediente C.D.-84/93. Por Secretaría me informan que el dictamen de este expediente ingresó el 2 de diciembre de 1994.

Tiene la palabra el señor senador por Jujuy.

**Sr. Cabana.** — Señor presidente: es para solicitar el tratamiento sobre tablas para este tema, que es necesario aprobar en forma urgente.

**Sr. Presidente (Menem).** — En consideración la moción de tratamiento sobre tablas formulada por el señor senador por Jujuy.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

— La votación resulta afirmativa.

**Sr. Presidente (Menem).** — Por Secretaría se dará lectura.

**Sr. Secretario (PiuZZi).** — (*Lee*)

#### Dictamen de comisión

#### Honorable Senado:

Vuestras comisiones de Familia y Minoridad y de Asuntos Penales y Regímenes Carcelarios, han considerado el proyecto de ley venido en revisión sobre protección contra la violencia familiar; el proyecto de ley del señor senador Solari Yrigoyen (S.-303/94) sobre violencia doméstica y el proyecto de ley del señor senador de la Rúa (S.-453/94) sobre violencia familiar; y vuestras comisiones de Familia y Minoridad; de Legislación General y de Asuntos Penales y Regímenes Carcelarios han considerado el proyecto de ley del señor senador Figueroa (S.-45/94) instituyendo la acción de amparo familiar; y por las razones que dará el miembro informante, os aconsejan la aprobación del proyecto de ley venido en revisión (C.D.-86/93).

De acuerdo a lo establecido en el artículo 119 del reglamento, este dictamen pasa directamente al orden del día.

Sala de las comisiones, 30 de noviembre de 1994.

**Oraldo N. Britos.** — **Olijela del Valle Rivas.** — **Fernando V. Cabana.** — **Conrado Storani.** — **Augusto Alasino.** — **Julio A. San Millán.** — **Mario A. Losada.** — **Fernando de la Rúa.** — **Guillermo E. Snopce.** — **José Genoud.** — **Ricardo A. Branda.** — **Jorge J. Cendoya.**

### Sanción de la Honorable Cámara de Diputados (1º de diciembre 1993)

*El Senado y Cámara de Diputados, ...*

#### Ley de protección contra la violencia familiar

**Artículo 1º** — Toda persona que sufriese lesiones o maltrato físico o psíquico por parte de alguno de los integrantes del grupo familiar podrá denunciar estos hechos en forma verbal o escrita ante el juez con competencia en asuntos de familia y solicitar medidas cautelares conexas. A los efectos de esta ley se entiende por grupo familiar el originado en el matrimonio o en las uniones de hecho.

**Art. 2º** — Cuando los damnificados fuesen menores o incapaces, ancianos o discapacitados, los hechos deberán ser denunciados por sus representantes legales y/o el ministerio público. También estarán obligados a efectuar la denuncia los servicios asistenciales sociales o educativos, públicos o privados, los profesionales de la salud y todo funcionario público en razón de su labor. El menor o incapaz puede directamente poner en conocimiento de los hechos al ministerio público.

**Art. 3º** — El juez requerirá un diagnóstico de interacción familiar efectuado por peritos de diversas disciplinas para determinar los daños físicos y psíquicos sufridos por la víctima, la situación de peligro y el medio social y ambiental de la familia. Las partes podrán solicitar otros informes técnicos.

**Art. 4º** — El juez podrá adoptar, al tomar conocimiento de los hechos motivo de la denuncia, las siguientes medida cautelares:

- Ordenar la exclusión del autor, de la vivienda donde habita el grupo familiar;
- Prohibir el acceso del autor, al domicilio del damnificado como a los lugares de trabajo o estudio;
- Ordenar el reintegro al domicilio a petición de quien ha debido salir del mismo por razones de seguridad personal, excluyendo al autor;
- Decretar provisoriamente alimentos, tenencia y derecho de comunicación con los hijos.

El juez establecerá la duración de las medidas dispuestas de acuerdo a los antecedentes de la causa.

**Art. 5º** — El juez, dentro de las 48 horas de adoptadas las medidas precautorias, convocará a las partes y al ministerio público a una audiencia de mediación instando a las mismas y su grupo familiar a asistir a programas educativos o terapéuticos, teniendo en cuenta el informe del artículo 3º.

**Art. 6º** — La reglamentación de esta ley preverá las medidas conducentes a fin de brindar al imputado y su grupo familiar asistencia médica psicológica gratuita.

**Art. 7º** — De las denuncias que se presente se dará participación al Consejo Nacional del Menor y la Familia a fin de atender la coordinación de los servicios públicos y privados que eviten y, en su caso, superen las causas del maltrato, abusos y todo tipo de violencia dentro de la familia.



Para el mismo efecto podrán ser convocados por el juez los organismos públicos y entidades no gubernamentales dedicadas a la prevención de la violencia y asistencia de las víctimas.

Art. 8° — Incorpórase como segundo párrafo al artículo 310 del Código Procesal Penal de la Nación (ley 23.984) el siguiente:

En los procesos por alguno de los delitos previstos en el libro segundo, títulos I, II, III, V y VI, y título V, capítulo I del Código Penal, cometidos dentro de un grupo familiar conviviente, aunque estuviese constituido por uniones de hecho, y las circunstancias del caso hicieren presumir fundadamente que pueden repetirse, el juez podrá disponer como medida cautelar la exclusión del hogar del procesado. Si el procesado tuviere deberes de asistencia familiar y la exclusión hiciere peligrar la subsistencia de los alimentados, se dará intervención al asesor de menores para que se promuevan las acciones que correspondan.

Art. 9° — Invítase a las provincias a dictar normas de igual naturaleza a las previstas en la presente.

Art. 10. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

ALBERTO R. PIERRI.

*Esther H. Pereyra Arandía  
de Pérez Pardo.*

## ANTECEDENTES

### I

#### PROYECTO DE LEY

*El Senado y Cámara de Diputados, etc.*

#### Ley nacional sobre violencia doméstica

Artículo 1° — Toda persona que sufriese lesiones leves o maltrato físico o psíquico por parte de algunos de los integrantes del grupo familiar conviviente, podrá denunciar los hechos al juez en lo civil o ante los tribunales de familia si ya funcionaren en la jurisdicción correspondiente a su domicilio. En los lugares donde aún no existan, la competencia para el juzgamiento de estos hechos pasará a los Tribunales de Familia a partir del momento de su creación. Cuando las víctimas fuesen menores de edad o incapaces, los hechos podrán ser denunciados por el Ministerio Público de Menores, por servicios asistenciales, sociales y educativos y por profesionales de la salud cuando existieran sospechas serias de que el menor o incapaz ha sido objeto de malos tratos dentro del grupo familiar conviviente.

Art. 2° — La presentación podrá hacerse en forma escrita o verbal, con o sin patrocinio letrado. Para la sustanciación del proceso, las partes deberán tener asistencia letrada. Si alguna de las partes carece de recursos se le designará un abogado patrocinante de oficio. Igualmente se hará dicha designación si la víctima fuera un menor que carece de representante legal o éste fuese el imputado. Las funciones de patrocinio indicadas estarán a cargo de los funcionarios que a tal efecto ya operasen en las distintas jurisdicciones o pudiesen instituirse en el futuro. En el escrito inicial, el interesado podrá pedir todas las medidas cautelares de urgencia conexas

con el hecho de violencia denunciado: exclusión del hogar, reintegro al mismo, alimentos, tenencia de hijos, régimen de visitas.

Art. 3° — El procedimiento será sumarisimo y de carácter oral. El juez fijará una audiencia, que tomará personalmente, dentro de las 48 horas de conocer los hechos. Citará a la víctima y al presunto autor quienes están obligados a comparecer bajo apercibimiento de ser traídos por la fuerza pública, siendo pasibles de las sanciones disciplinarias que juzgue el tribunal. En dicha audiencia el juez ordenará las medidas precautorias que fueren pertinentes. Si los hechos aducidos fuesen controvertidos, las partes deberán ofrecer la prueba que hace a su derecho en dicho acto o dentro de los tres días de realizada la audiencia, la que tendrá que ser producida en el término de quince (15) días. El juez fijará dentro de dicho plazo una audiencia para que declaren los testigos propuestos, se produzca la prueba confesional y las partes formulen observaciones a las pericias, las cuales deberán ser presentadas con una antelación de tres días a la fecha fijada para la audiencia. Las observaciones formuladas a las pericias presentadas se contestarán en el mismo acto de la audiencia por la contraparte y los peritos. Las actuaciones de prueba producidas serán igualmente incorporadas al debate. Si por razones de tiempo, la producción de la prueba no terminase en dicha audiencia, se señalarán audiencias en días sucesivos hasta su total producción.

Art. 4° — En todos los casos el juzgado requerirá un diagnóstico de la interacción familiar por un psicólogo especializado que el juez designará de oficio, pudiendo también el magistrado o las partes solicitar otros informes técnicos. El juez establecerá los daños físicos o psíquicos sufridos por la víctima; la situación de peligro en que se encuentra; el medio social y ambiental de la familia y las características de su funcionamiento. Para estas evaluaciones se valdrá de los informes de expertos en las distintas áreas.

Art. 5° — El juez tendrá amplias facultades ordenatorias e introductorias, pudiendo disponer las medidas que fueren necesarias para indagar los sucesos, ubicar el paradero del acusado y proteger a quienes corran el riesgo de ser víctimas de nuevos actos de violencia.

Art. 6° — Regirá el principio de amplia libertad probatoria para acreditar los hechos denunciados, evaluándose las pruebas ofrecidas de acuerdo a los principios de libre convicción y sana crítica. Se considerarán las presunciones que contribuyan a la demostración de los hechos, siempre que sean indicios graves, precisos y concordantes.

Art. 7° — El juez podrá adoptar las siguientes medidas provisorias conexas con la situación denunciada si se ha acreditado la verosimilitud de los actos de violencia denunciados:

- Ordenar la exclusión del autor de la vivienda donde habita el grupo familiar si halla que la continuación de la convivencia significa un riesgo para la integridad física y psíquica de algunos de sus integrantes. La duración de la medida la determinará el juez según las circunstancias del caso;
- Con el objeto de evitar la repetición de los actos de violencia, el juez podrá prohibir el acceso del

imputado al domicilio de quien fue víctima de los hechos denunciados, como igualmente a los lugares de trabajo o estudio del afectado. Podrá igualmente, a petición de parte, prohibir que el autor realice actos de perturbación o intimidación a alguno de los integrantes del grupo familiar conviviente. El juez establecerá la duración de la medida dispuesta de acuerdo a los antecedentes de la causa;

- c) Podrá también el tribunal decidir el reintegro al domicilio a petición de quien ha debido salir del mismo por razones de seguridad personal, excluyendo en tal caso de dicha vivienda al agresor;
- d) Fijará una cuota alimentaria provisoria, si correspondiese, de acuerdo a los antecedentes obrantes en la causa y según las normas que rigen la materia, si no hay acuerdo de las partes;
- e) Establecerá el régimen provisorio de tenencia de hijos y visitas si correspondiese y conforme a las reglas legales ya establecidas. El juez procurará que las partes arriben a un acuerdo sobre las cuestiones precedentemente indicadas y para ello se valdrá de terapeutas familiares o expertos que se consideren necesarios, quienes intervendrán en las gestiones de mediación;
- f) En caso de que la víctima fuese un menor o incapaz, el juez puede otorgar la guarda protectora del menor a quien considere idóneo para tal función, si esta medida fuera necesaria para la seguridad psicofísica del menor y hasta tanto se efectúe un diagnóstico de la situación. Igualmente tomará los recaudos indispensables para preservar la salud psicofísica del menor. Esta atribución del magistrado no deroga las facultades que el artículo 14 de la ley 10.903 otorga a los jueces penales, para el supuesto de que los hechos fuesen investigados en el ámbito penal.

Art. 8º — Ante la comprobación de los hechos denunciados o el incumplimiento de las órdenes emitidas y previa audiencia con el infractor, el juez podrá adoptar algunas o varias de las siguientes sanciones alternativas, según las circunstancias del caso:

- a) Amonestación o represión por el acto cometido. Si los hechos denunciados vuelven a reiterarse, el juez podrá aplicar alguna de las otras sanciones que se prevén en esta ley;
- b) Multas pecuniarias a favor de la víctima;
- c) Asistencia obligatoria del imputado a programas educativos o terapéuticos por el tiempo y el medio que definan los expertos.

Art. 9º — Durante el transcurso de la causa y después de la misma por el tiempo que se juzgue prudente, el juez deberá controlar el resultado de las medidas y decisiones adoptadas, ya sea a través de la comparecencia de las partes al tribunal con la frecuencia que se ordene o bien mediante la intervención de asistentes sociales quienes darán informes periódicos acerca del desenvolvimiento familiar.

Art. 10. — La parte damnificada podrá reclamar en este proceso la reparación civil por los daños y perjuicios ocasionados según las normas comunes que rigen la ma-

Art. 11. — Si la víctima optase por este recurso, no podrá promover la acción penal. En todos los supuestos en que de los hechos investigados resultase otro delito que no fuese el de lesiones leves, se remitirán las actuaciones a la Justicia penal. El interesado, en los casos en que el hecho sea juzgado por la Justicia penal, puede peticionar en esta instancia las medidas provisorias que prevé la presente ley. Los funcionarios policiales, como asimismo los organismos o instituciones a los cuales acudan las personas afectadas, tienen la obligación de informar sobre los recursos legales existentes frente a los actos de violencia doméstica.

Art. 12. — Los antecedentes y documentación correspondientes a los procedimientos se mantendrán en reserva, salvo para las partes, letrados y expertos intervinientes. Las audiencias serán privadas.

Art. 13. — Los jueces podrán solicitar la colaboración de todas las organizaciones o entidades públicas o privadas dedicadas a la protección de los menores, las mujeres y las familias a los efectos de que brinden asistencia a las personas afectadas por los hechos denunciados.

Art. 14. — La Cámara Nacional en lo Civil o el organismo centralizador de los Tribunales de Familia donde éstas funcionaren, llevarán estadísticas de los casos presentados, características sociodemográficas de las partes, naturaleza de los hechos y resultados de las medidas adoptadas.

Art. 15. — En todo lo que no estuviese previsto por la presente ley, regirán las normas del Código de Procedimientos en Materia Civil y Comercial de las jurisdicciones respectivas.

Art. 16. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

*Hipólito Solari Yrigoyen.*

## FUNDAMENTOS

Señor presidente:

El proyecto de ley sobre violencia doméstica que elevo a consideración del Honorable Senado reproduce una iniciativa del senador radical doctor Luis Agustín J. Brasesco (expediente S.-311), presentada el 12 de julio de 1988 y sancionada por unanimidad por este alto cuerpo legislativo. La falta de tratamiento oportuno por la Honorable Cámara de Diputados determinó su caducidad en los términos de las leyes 13.640 y 23.821.

La necesidad de contar en nuestra legislación civil con un recurso especial para afrontar los actos de violencia doméstica, me ha determinado a insistir en la sanción de este meritorio proyecto legislativo.

Entre los antecedentes del proyecto se cuentan las recomendaciones del VII Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, las recomendaciones del Consejo de Europa del 26 de marzo de 1985 y diversas propuestas y lineamientos de acción elaborados en el país, entre ellos, los diferentes proyectos de creación de tribunales de familia y las conclusiones de una investigación realizada en el marco del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas por un equipo de trabajo dirigido por la doctora Cecilia P. Grosman.

En relación a la legislación extranjera se han considerado, entre otras, la Ley de Ohio, USA, de 1979; la Ley

Inglesa (Domestic Violence and Matrimonial Proceeding Act); la Ley de Irlanda de 1976 y la Ley de los Tribunales de Familia del Estado de Nueva York reformada en 1986.

El ordenamiento que se propone tiene como objetivo actuar contra la indivisibilidad del fenómeno para prevenirlo a facilitar su tratamiento. Sabido es que los casos denunciados a las autoridades policiales son mínimos en relación a la magnitud del fenómeno y muchos menos son los hechos que llegan a la instancia penal ya que son múltiples las razones que conducen a la pasividad de la víctima. Esta, por otra parte, desiste con frecuencia de la acción emprendida, porque más que la condena busca amparo y aspira a un cambio de comportamiento del agresor.

La vía del procedimiento penal ha demostrado ser insuficiente para prevenir y actuar contra los hechos abusivos en el seno de la familia. Las normas penales no son efectivas en estos casos, ya que si bien no se legitiman en la práctica las conductas violentas, diversos supuestos subyacentes que pesan sobre el juez paralizan su acción. Aunque el camino legal que se propone no excluye la posibilidad de iniciar las acciones penales comunes frente a las conductas típicas de un delito, se abre un nuevo mecanismo judicial para los actos violentos de menor gravedad que constituyen los casos más frecuentes en el ámbito familiar.

Una intervención civil puede provocar una mayor iniciativa para poner en evidencia los hechos violentos, lo cual permitirá que la justicia, como una de las formas de control social, actúe con mayor eficacia. El servicio de justicia se ha orientado con este proyecto, dentro de una dimensión no represora, a obtener protección y asistencia al grupo familiar.

Desde luego, para evitar un doble juzgamiento de los hechos y la posibilidad de sentencias contradictorias, el interesado deberá optar por alguna de las dos vías, civil o penal, aun cuando siempre podrá peticionar en la instancia civil las medidas provisionales que se prevén en el presente proyecto de ley.

Este recurso legal, destinado a ser empleado en una situación crítica, debe ir acompañado de la creación de mecanismos comunitarios que prevengan la aparición del fenómeno violento desde su faz más temprana.

Por otra parte, es indudable la conveniencia de que todos los problemas familiares derivados de los actos de violencia doméstica, exclusión de la vivienda, reintegro a la misma, alimentos, tenencia, sean tratados por un mismo juez.

El proyecto no sólo contempla los actos de fuerza que provocan las lesiones mencionadas por el Código Penal, sino también diversas formas de violencia, coerción o intimidación que producen sufrimientos a la víctima y afectan la calidad de vida de la familia. Sólo considera las lesiones leves que son los supuestos de mayor frecuencia. Los delitos más graves serán juzgados exclusivamente por el juez penal, sin perjuicio de que el interesado peticione las medidas precautorias que se prevén en esta ley.

El proyecto tiene la intención de proteger a todos los integrantes del grupo familiar a través de un procedimiento oral y sumárisimo pues se trata de problemas que la sociedad debe resolver con celeridad y con el ánimo de componer, si fuese posible, el conflicto de la familia.

Es necesario que los hechos sean juzgados por tribunales de familia. La existencia de equipos de expertos que integrarían su estructura permitirá afrontar estas situaciones mediante un enfoque terapéutico, afirmándose al mismo tiempo la responsabilidad del imputado.

Resulta indispensable, además, introducir en nuestra legislación medidas protectoras de carácter urgente que posibiliten la interrupción del ciclo de la violencia.

De tal manera, esta iniciativa se inscribe en el marco más amplio de la protección de los derechos humanos en el seno de la familia. Por ello, puede afirmarse que este proyecto de ley cumple con el propósito de adaptar la legislación vigente a la ley 23.179, esto es, la ratificación de la Convención de Naciones Unidas contra toda forma de discriminación contra la mujer.

Al dar por reproducido este proyecto de ley debo destacar que el mismo es el resultado de un trabajo de calificados especialistas y que forma parte de la fecunda labor parlamentaria del colega y amigo, don Luis Agustín J. Brasesco, cuyo reconocimiento me honro en celebrar con esta iniciativa, tan cara a nuestra lucha por la defensa y promoción de los derechos humanos.

*Hipólito Solari Yrigoyen.*

2

## PROYECTO DE LEY

*El Senado y Cámara de Diputados,...*

### *Violencia familiar*

Artículo 1º — Toda persona que sufre lesiones leves o maltrato físico o psíquico por parte de alguno de los integrantes del grupo familiar conviviente, podrá denunciar los hechos por ante los tribunales de familia. En los lugares donde aún no existan, la competencia para el juzgamiento de los hechos pasará a los tribunales civiles y a los de familia a partir del momento de su creación.

Cuando los damnificados fuesen menores de edad, incapaces, ancianos o discapacitados, los hechos deberán ser denunciados por el ministerio público de menores, por servicios asistenciales, sociales y educativos y por ser profesionales de la salud, cuando existieran sospechas serias de que el menor, incapaz, anciano o discapacitado, ha sido objeto de malos tratos dentro del grupo familiar conviviente.

En caso de omisión de denuncia los profesionales antes mencionados serán pasibles de las sanciones que prevé el Código Penal.

Art. 2º — La presentación podrá hacerse en forma escrita o verbal, con o sin patrocinio letrado. Para la sustanciación del proceso, las partes deberán tener asistencia letrada. Si alguna de las partes carece de recursos se dará intervención al señor asesor de pobres y ausentes. Igualmente intervendrá dicho funcionario si el damnificado fuere un menor que carece de representante legal o éste fuese un presunto agresor. En su presentación, el interesado podrá peticionar todas las medidas precautorias y provisionales de urgencia conexas con el hecho de violencia denunciado: exclusión del hogar, reintegro al mismo, alimentos, tenencia de hijos, régimen de visitas, etcétera.



### *Disposiciones de carácter personal*

Art. 3º — El procedimiento será sumarísimo y de carácter oral. El juez fijará una audiencia, que tomará personalmente, dentro de las 48 (cuarenta y ocho) horas de conocer los hechos. Citará al damnificado y al presunto autor o autores quienes estarán obligados a comparecer bajo apercibimiento de ser traídos por la fuerza pública, siendo pasibles de las sanciones disciplinarias que fije el tribunal. Si el damnificado fuera menor, incapaz, anciano o discapacitado, su comparecencia quedará librada al criterio judicial. En dicha audiencia el juez ordenará las medidas provisionales y precautorias que fueran pertinentes. Si los hechos aducidos fuesen controvertidos, las partes deberán ofrecer la prueba que hace a su derecho en dicho acto o dentro de los tres días de realizada la audiencia, la que tendrá que ser producida en el término de 15 (quince) días.

En la misma audiencia se requerirá un diagnóstico de la interacción familiar por un equipo interdisciplinario que el juez designará de oficio se acudirá a los grupos de apoyo creados al efecto. También podrán las partes proponer otros informes técnicos. El juez evaluará los daños físicos y psíquicos sufridos por el damnificado, la situación de peligro en que se encuentra, el medio social y ambiental de la familia y las características de su funcionamiento. Para estas evaluaciones se valdrá de los informes de expertos en las distintas áreas.

Art. 4º — Dentro de los quince (15) días fijados para la producción de la prueba el juez fijará una audiencia para que declaren los testigos propuestos, se produzca la prueba confesional y las partes formulen observaciones a las pericias, las cuales deberán ser presentadas con una antelación de 3 (tres) días a la fecha fijada para la audiencia. Las observaciones formuladas a las pericias presentadas se contestarán en el mismo acto de la audiencia por la contraparte y los peritos. Las actuaciones de pruebas producidas serán igualmente incorporadas al debate. Si por razones de tiempo, la producción de la prueba no terminase en dicha audiencia, se señalarán audiencias en días sucesivos hasta su total producción.

Art. 5º — El juez tendrá amplias facultades ordenatorias e instructorias, pudiendo disponer las medidas que fueren necesarias para indagar los sucesos, ubicar el paradero del o de los presuntos autores y proteger a quienes corran el riesgo de ser víctimas de nuevos actos de violencia.

Art. 6º — Regirá el principio de amplia libertad probatoria para acreditar los hechos denunciados, evaluándose las pruebas ofrecidas de acuerdo a los principios de libre convicción y sana crítica. Se considerarán las presunciones que contribuyan a la demostración de los hechos, siempre que sean indicios graves, precisos y concordes.

Art. 7º — Acreditada la verosimilitud de los hechos, el juez podrá adoptar las siguientes medidas provisionales y precautorias concordantes a los hechos denunciados:

- a) Ordenar la exclusión del autor o autores, de la vivienda donde habita el grupo familiar, si halla que la continuación de la convivencia significa un riesgo para la integridad física y psíquica de alguno de sus integrantes. La duración de la medida la determinará el juez según la circunstancia

- b) Con el objeto de evitar repetición de los actos de violencia, el juez podría prohibir el acceso del imputado o imputados al domicilio de quien fue víctima de los hechos denunciados, como igualmente a los lugares de trabajo o estudio del afectado. Podrá igualmente, a petición de parte, prohibir al autor o autores la realización de actos de perturbación o intimidación a alguno de los integrantes del grupo familiar conviviente. El juez establecerá la duración de la medida dispuesta de acuerdo a los antecedentes de la causa;
- c) Podrá también el tribunal decidir el reintegro al domicilio a petición de quien ha debido salir del mismo por razones de seguridad personal, excluyendo en tal caso de dicha vivienda al agresor;
- d) Deberá fijar una cuota alimentaria provisoria, si correspondiese, de acuerdo a los medios del alimentante y en caso de desacuerdo de las partes;
- e) Establecerá el régimen provisorio de tenencia de hijos y visitas si correspondiese y conforme a las reglas legales ya establecidas. El juez procurará que las partes arriben a un acuerdo sobre las cuestiones precedentemente indicadas y para ello se valdrá de terapeutas familiares y/o de expertos que se consideren necesarios, quienes intervendrán en las gestiones de mediación;
- f) En caso de que el damnificado fuese un menor, incapaz, anciano o discapacitado, el juez puede otorgar la guarda protectora del mismo a quien considere idóneo para tal función, si esta medida fuere necesaria para la seguridad psicofísica del damnificado y hasta tanto se efectúe un diagnóstico de la situación. Igualmente tomará los recaudos indispensables para preservar la salud psicofísica del menor, incapaz, anciano o discapacitado. Esta atribución del magistrado no deroga las facultades que la ley 10.903, artículo 14, otorga a los jueces penales, para el supuesto de que los hechos fuesen investigados en el ámbito penal.

Art. 8º — Ante la comprobación de los hechos denunciados o el incumplimiento de la órdenes emitidas y previa audiencia con el infractor o infractores, el juez adoptará alguna o varias de las siguientes sanciones alternativas, según las circunstancias del caso:

- a) Asistencia obligatoria del agresor a programas educativos o terapéuticos por el tiempo y el modo que definan los expertos. Si el juez lo estima conveniente, podrá indicar el tratamiento terapéutico del grupo familiar conviviente;
- b) Multas pecuniarias a favor de la víctima y su grupo familiar;
- c) Realización de los trabajos comunitarios.

Art. 9º — Durante el transcurso de la causa y después de la misma, juntamente con la sentencia, el juez deberá controlar las medidas y decisiones adoptadas por el tiempo que juzgue conveniente. A tales efectos designará el organismo público o privado encargado de realizar la gestión.

Sus profesionales informarán acerca de la marcha del funcionamiento familiar, en forma trimestral al juzgado.



Art. 10. — La parte damnificada podrá reclamar en este proceso la reparación civil por los daños y perjuicios ocasionados según las normas comunes que rigen la materia.

Art. 11. — El procedimiento será reservado salvo para las partes, letrados y expertos intervinientes. Las audiencias también serán privadas.

Art. 12. — Los jueces podrán solicitar la colaboración de todas las organizaciones o entidades públicas o privadas dedicadas a la protección de los menores, las mujeres, los discapacitados y las familias y los ancianos, a los efectos de que brinden asistencia a las personas afectadas por los hechos denunciados.

Art. 13. — Las cámaras de apelaciones en lo civil llevarán estadísticas sociodemográficas de las partes, naturaleza de los hechos y resultados de las medidas adoptadas. Asimismo, los juzgados que intervinieren en los casos de violencia familiar, deberán remitir a las cámaras civiles, los datos personales de identificación de victimarios y víctimas, a fin de que esa información sea requerida cada vez que la justicia se aboque a estas situaciones.

Art. 14. — En todo lo que no estuviese previsto por la presente ley, regirán las normas del Código de Procedimientos en materia civil y comercial de las jurisdicciones respectivas.

#### *Disposiciones de carácter general*

Art. 15. — En los casos mencionados en el artículo 7º, inciso c) el damnificado y/o grupo familiar serán alojados en hogares de tránsito, con el objeto de brindarles albergue, alimentos, protección, asistencia médica y psicológica por todo el tiempo que dure la medida.

Art. 16. — Los hogares de tránsito, asistencia, protección y defensa de la mujer, contarán con personal especializado en derecho, asistencia social, medicina, sociología, relaciones humanas y psicología.

Se realizarán acuerdos entre el gobierno nacional, provincial, municipal y territorio federal a fin de determinar qué lugares serán afectados a este fin.

Art. 17. — La Secretaría de Desarrollo de la Persona elaborará convenios con asociaciones civiles y religiosas, así como entidades intermedias de bien público a los efectos de participar en los aspectos de la política de asistencia, protección, defensa y seguimiento del problema.

Art. 18. — Los gastos que demande la creación de estos hogares, en lo sucesivo se cubrirán con las partidas que se incluirán en la Ley de Presupuesto y que se distribuirán de acuerdo al modo que se acuerde con las provincias para la concreción de estos programas.

Art. 19. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

*Fernando de la Rúa.*

#### FUNDAMENTOS

Señor presidente:

El tema de la violencia familiar, ya sea física o moral, es un tema de antigua data tanto en nuestra sociedad como en el resto del mundo.

Hay creencias culturales que avalan la "invisibilidad" de la violencia a la par que muchas mujeres aceptan como "natural" el golpe o la sanción por parte de sus maridos o compañeros.

Sin embargo, la violencia se manifiesta muchas veces en forma silente. La inexpresividad emocional, la baja autoestima, la escasa habilidad para la comunicación verbal, la minimización de la conducta violenta, la proyección de la responsabilidad y la culpa son rasgos comunes en los golpeadores.

Entre los mitos incorporados a nuestra cultura podemos mencionar:

1. Solamente existe violencia familiar en los estratos sociales más pobres y marginales. La realidad es que hay violencia en todas las clases sociales y económicas.

2. A las mujeres les gusta que les peguen y por eso se quedan con el compañero golpeador. En realidad, la mayoría de las mujeres no abandonan al golpeador porque al principio de la relación violenta creen que lograrán que cambie de actitud, si ellas le demuestran su amor verdadero, luego se quedan por el temor a perder su vida, sus hijos y por la falta de posibilidades económicas.

3. Las mujeres golpeadas no deben denunciar a sus maridos porque "la familia es lo primero".

4. Los golpeadores son borrachos y/o enfermos. No todos los alcohólicos maltratan a sus mujeres y es mucho mayor la proporción de los que golpean sobrios, ya que cualquier excusa es válida para comenzar a pegar o insultar.

5. "El matrimonio no es un lecho de rosas."

Por estas razones consideramos que no se invade la intimidad familiar protegiéndola de los hechos de violencia que pueden darse en su seno.

El sistema judicial contribuye a enraizar estas creencias ya que los jueces actuando de un modo "paternalista", frente a una situación de esta índole pretenden "arreglar" a las partes, aconsejándoles que no se peleen más, lo cual si bien es una loable actitud no resuelve el problema.

Hemos considerado como base de este trabajo una propuesta de la doctora Cecilia Grossman, cuyo objetivo principal fue adaptar la legislación vigente a la ley 23.179 que ratificó la Convención de las Naciones Unidas contra Toda Forma de Discriminación contra la Mujer.

El objetivo principal de esta propuesta es otorgar un camino civil para los casos de lesiones leves, sin perjuicio que a la víctima le quedará siempre la posibilidad de la acción penal si ésa fuera su decisión. Sin embargo, el sistema penal demostró ser insuficiente y hasta perjudicial en su aplicación; el mismo se encuentra limitado por los "tipos", con lo cual la lesión denunciada deberá ser demostrada en forma fehaciente, circunstancia que en los casos de la violencia moral escapan al ámbito probatorio tradicional.

En cuanto a las consecuencias, la familia podrá encontrarse sin sustento por un tiempo determinado o bien las represalias que el agresor tome contra su compañera pueden llegar a ocasionar daños mayores.

No sólo buscamos poner un remedio a la agresión ya existente, sino también pretendemos brindar tratamiento al agresor a fin de recuperar la estabilidad familiar.

Hemos optado por un proceso sumarisimo por considerar que la justicia frente a una denuncia concreta de violencia debe actuar con la mayor celeridad posible a fin de encontrar pronta solución a un conflicto que, dada su

gravedad, no admite dilaciones. A los mismos fines el juez tendrá amplias facultades instructorias y ordenatorias según los principios de la libre convicción y sana crítica.

Una vez denunciado el hecho, el juez decidirá si la víctima permanece o no en su hogar. Es necesario facultar al juez en esta opción debido a que en muchas circunstancias puede resultar difícil excluir al agresor del hogar, sobre todo cuando éste es de su propiedad.

La presente medida debe necesariamente ser compatibilizada con disposiciones preventivas, tales como la creación de hogares de tránsito con el fin de atender las necesidades más urgentes, ya que la unión de estos programas dará mayor respuesta a nuestra realidad socioeconómica. De nada servirá obtener una normativa sobre violencia doméstica si luego la misma se tornara de imposible cumplimiento, cuando frente a la situación concreta la víctima no tiene ni albergue ni asistencia. A tal fin, resulta imperioso modificar la ley 23.515 en cuanto a la materia alimentaria se refiere.

Desde otro punto de vista, el servicio telefónico permanente constituye un importante abordaje para atender situaciones de crisis cuando la víctima aún no ha decidido formalizar la denuncia. En esa circunstancia se trata de crear una atmósfera de sinceridad y respeto donde se escucha a la demandante al tiempo que se trata de transmitirle algunas ideas centrales, tales como: ella no es responsable de la conducta de su compañero, que no es la única a quien le sucede y que no es un problema privado sino que pertenece al ámbito de lo público. Es importante que sepa que el maltrato es un delito.

En relación a la legislación extranjera se ha considerado, entre otras, a la ley de Ohio (USA) de 1979; ley de Irlanda de 1976; ley de los tribunales de familia del estado de Nueva York, reformada en 1986; declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso del poder (aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1985); VII Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente (1985, Milán, Italia); VIII Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente (La Habana, 27 de agosto al 7 de septiembre de 1990).

Asimismo, y revisando la legislación latinoamericana consultada, hemos observado un vacío legislativo común, ya que, por ejemplo, países tales como Brasil, Cuba, República Dominicana, El Salvador, Chile, Honduras, Panamá, Perú, Uruguay y Venezuela, contemplan la violencia sólo en referencia al menor y como delito del derecho penal. Cuba lo legisla en el Código de Defensa Social de 1936 (sustracción, abandono, maltrato de menores incapacitados y desvalidos). Chile lo legisla en el Código Penal con algunas normas en el Código Civil, pero sin hacer mención específica alguna. República Dominicana lo regula en el Código Penal. El Salvador en el Código Penal como delitos contra la asistencia familiar (sólo contempla la violencia al menor). Panamá, también en el Código Penal en el título de abuso en la corrección de subordinados y malos tratos a la familia respecto del menor. Perú en el Código Penal referido al menor. Uruguay en el Código Penal referido al menor. Uruguay en el Código del Niño. Venezuela en el Código Penal que regula las costumbres y buen orden de la familia (capítulo de corrupción y ultrajes al honor, etcétera).

Desde otro punto de vista, Italia lo regula en el Código Penal como abuso al poder de corrección o disciplina. España lo regula en el Código Civil de 1972 como causa legítima de separación y en el Código Penal como agravantes para los ascendientes, hermanos naturales legítimos y adoptivos y descendientes.

La dignidad y respeto es un derecho inalienable de la persona. Todo individuo debe tener la posibilidad de vivir en una familia armónica y ser amado y valorado. Paralelamente a ello, consideramos que el agresor también tiene derecho a ser asistido y recuperado, a fin de volver a ocupar un lugar en su hogar, siempre que ello fuese posible.

Por estos motivos recomendamos la sanción de esta ley que representa una herramienta eficaz en el encuadre de esta problemática, siempre que contemos con la ayuda de toda la comunidad.

*Fernando de la Rúa.*

### 3

#### PROYECTO DE LEY

#### *El Senado y Cámara de Diputados,...*

Artículo 1º — Institúyese la acción de amparo familiar para hacer cesar los actos de violencia o abandono que afecten la integridad física o psíquica de las personas que conforman un grupo familiar, provocadas por un integrante del mismo o por un tercero sin que medie resistencia efectiva por los miembros del grupo.

Art. 2º — Podrán interponer la acción todas aquellas personas que se consideren afectadas por lesiones o maltrato físico o psíquico, los representantes legales de menores, incapaces y ancianos, el ministerio público y los funcionarios o agentes de la administración pública que en ejercicio de sus funciones tomen conocimiento de hechos que habilitan la procedencia de la acción.

Art. 3º — La acción se interpondrá ante cualquier juez y éste la remitirá a quien resulte competente en materia penal y/o de familia, sin perjuicio de ordenar las medidas urgentes que resulten necesarias. La interposición podrá ser verbal o escrita.

Art. 4º — El juez dispondrá dentro de las 24 horas la constatación del hecho y de la situación de las víctimas de violencia familiar, y:

- Ordenará la intervención de los organismos públicos competentes a efectos de ejecutar las medidas tendientes al cese del daño y a la superación de las causas que lo originaron;
- Dará intervención al ministerio público fiscal a fin de promover la acción penal en caso de así corresponder en virtud de la naturaleza del hecho;
- Ordenará las medidas urgentes y cautelares que resulten adecuadas.

Art. 5º — Modifícase el artículo 234 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, el que quedará redactado de la siguiente forma:

Para la protección de la integridad física y psíquica de las personas, los jueces podrán:

- Ordenar la exclusión del agresor físico o psíquico del hogar familiar;

- b) Prohibir el acceso del agresor físico o psíquico al domicilio del damnificado, a su lugar de trabajo o al de estudio;
- c) Ordenar el reintegro al domicilio a petición de quien ha debido salir del mismo por razones de seguridad, excluyendo al causante;
- d) Decretar la guarda:

1. De la mujer menor de edad que intentase contraer matrimonio, entrar en comunidad religiosa o ejercer determinada actividad contra la voluntad de sus padres o tutores.
2. De menores o incapaces que sean maltratados por sus padres, tutores, curadores o guardadores o inducidos por ellos a actos ilícitos o deshonestos o expuestos a graves riesgos físicos o morales.
3. De menores o incapaces abandonados o sin representantes legales o cuando éstos estuvieren impedidos de ejercer sus funciones.
4. De los incapaces que estén en pleito con sus representantes legales, en el que se controvierta la patria potestad, tutela o curatela, o sus efectos;

- e) Decretar provisoriamente alimentos, tenencia y derecho de comunicación con los hijos.

Art. 6° — Incorpórase como segundo párrafo al artículo 310 del Código Procesal Penal de la Nación (ley 23.984) el siguiente:

En los procesos por alguno de los delitos previstos en el libro segundo, títulos I, II, III, V y VI y título V, capítulo I del Código Penal, cometidos dentro del grupo familiar conviviente, aunque estuviere constituido por uniones de hecho y las circunstancias del caso hicieren presumir fundadamente que pueden repetirse, el juez podrá disponer como medida cautelar la exclusión del hogar del procesado. Si el procesado tuviere deberes de asistencia familiar y la exclusión hiciere peligrar la subsistencia de los alimentados, se dará intervención al asesor de menores para que se promuevan las acciones que corresponda.

Art. 7° — A los fines de la acción de amparo, entiéndese por grupo familiar tanto al originado por vínculo matrimonial como al surgido de uniones de hecho.

Art. 8° — Invítase a las provincias a dictar normas de igual naturaleza a las previstas en esta ley.

Art. 9° — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

*José O. Figueroa.*

## FUNDAMENTOS

Señor presidente:

Se pretende con esta iniciativa impulsar una solución jurídica ágil para superar los conflictos de violencia familiar.

Con respecto a otros precedentes parlamentarios, que indudablemente han servido de fuente de análisis y cri-

tica, el presente aspira a reglar la cuestión con una mayor extensión tanto en su alcance como en sus efectos.

Así, se instituye una genuina acción procesal con una finalidad definida. Se contempla no sólo la violencia física y psíquica sino también el abandono, se incorpora como sujeto activo de la agresión además de los integrantes del grupo familiar a los terceros.

Dado que la agresión familiar puede ser materia civil y/o penal según la naturaleza del hecho, se ha previsto la interposición ante cualquier juez, asignándose a éste la posterior derivación de las actuaciones ante quien resulte competente. Conteste con la acción de amparo, la presente también está dotada de un informalismo en favor del administrado.

En cuanto a la constatación del hecho y la situación de la víctima no se impone al juez un procedimiento determinado para hacerlo sino que se deja librado a su prudente arbitrio la adopción de las medidas que mejor resulten para ello.

En cuanto a las medidas a adoptar con carácter urgente, sean por el juez competente o por ante quien sea interpuesto, éste dispone de todo el repertorio existente en el ordenamiento jurídico positivo, tanto sustantivo como procesal.

En cuanto a las llamadas medidas "urgentes" este proyecto recoge varias de ellas pero en lugar de proponerlas como aplicables a esta acción en particular, se propicia su incorporación al Código Procesal Civil y Comercial de la Nación en su artículo 234 que contiene medidas cautelares para protección de personas. Así, tanto resultan aplicables al amparo familiar como a todo otro proceso donde, acreditados los requisitos de procedencia, las mismas podrán ser decretadas. Igual ocurre con la propuesta de modificación del artículo 310 del Código Procesal Penal.

Un último comentario merece el silencio respecto a la participación de organizaciones no gubernamentales. Con ello no se ha querido marginarlas de la actuación que hace a los objetivos que puedan animar su existencia, sino que quedan subsumidos en el artículo cuarto inciso a) ya que los organismos públicos competentes son quienes periódicamente coordinan actividades con estas entidades, tal el caso por ejemplo del Consejo Nacional del Menor y la Familia.

Con las consideraciones brevemente expuestas, que se abonarán con el elevado criterio de los señores senadores, solicito vuestra adhesión a la iniciativa a efectos de su oportuna aprobación.

*José O. Figueroa.*

**Sr. Presidente (Menem).** — En consideración en general.

Tiene la palabra el señor senador por Jujuy.

**Sr. Cabana.** — Señor presidente: el Poder Legislativo está en mora con la sociedad argentina en un tema tan crucial para ella como es la violencia familiar. Pero lo está en el aspecto formal, ya que no hubo apatía por parte de los legisladores de ambas Cámaras y de las comisiones competentes. Por el contrario, se ha realizado un arduo trabajo.

En la Cámara de Diputados hubo cuatro proyectos que finalmente confluyeron en uno que sancionó dicha Cámara. En esta Cámara, los senadores de la Rúa, Figueroa y Solari Yrigoyen, haciéndose eco de dicha problemática, también presentaron proyectos vinculados con el tema. Son proyectos enjundiosos que prueban una medulosa labor de mis pares y que merecieron un profundo análisis en las comisiones. Además, con relación a este tema, en el mes de junio en el Salón de Lectura del Honorable Senado organizamos una jornada sobre violencia familiar, con destacados expositores en la materia.

Ahora bien, señor presidente, dije que el Parlamento está en mora con la sociedad, que reclama una ley que atenúe este grave problema social: la violencia familiar. Por lo tanto, es nuestra obligación legislar para satisfacer las demandas de esa sociedad, y el momento es ahora. Debemos tomar una decisión, que es la que plantearé a mis pares. Se trata de que en esta ocasión demos sanción al proyecto venido en revisión de la Cámara de Diputados, con lo cual tendremos un punto de partida para posteriores mejoramientos de la ley.

Será una primera estructura a la que, paulatinamente, se irá agregando, modificando o sustituyendo lo que la experiencia nos aconseje.

Podemos demostrar que la necesidad que se tiene de contar con un instrumento legal apropiado que contribuya a superar los episodios de violencia familiar reposa en razones que no admiten controversia ni toleran demoras. Esto lo han expresado en reiteradas oportunidades tanto las autoridades nacionales, las instituciones vinculadas a la familia como la sociedad toda.

A esta altura, es mi propósito dejar perfectamente establecido que la decisión de respaldar el proyecto que hoy ponemos a consideración del cuerpo no implica quitar mérito a los restantes. Por el contrario, siempre estará al alcance de esta Cámara la posibilidad de proponer las reformas que estime pertinentes o que aconsejen las circunstancias que en el futuro se presenten.

Las causas que originan la violencia familiar son complejas. Concurren desde factores económicos hasta problemas de conducta de uno o más miembros del grupo, problemas que pueden ser revertidos mediante los tratamientos adecuados o no.

La complejidad de las causas explica las dificultades con que se tropieza cuando se trata de encontrar la solución.

Pese a tales dificultades, el proyecto cuya aprobación proponemos procura implementar un procedimiento judicial abreviado, dándole al juez las facultades necesarias para que adopte las medidas de urgencia que estime pertinentes. Prescinde además de los rigores formales que se advierten en otros procedimientos.

Así, cabe destacar que el artículo 1º permite a las víctimas denunciar los hechos ante el juez con competencia en materia familiar en forma verbal o escrita.

Con todo ello, se pretende que quienes son víctimas de actos violentos puedan buscar el auxilio que el Estado está obligado a dispensar a través de los organismos judiciales especializados sin tener que afrontar las dificultades formales que supone la promoción de un juicio ordinario o común.

Por ello, el primer acierto que cabe destacar de este proyecto es que contiene normas por las cuales implementa un procedimiento especial para que las víctimas puedan requerir el auxilio inmediato para hacer cesar el acto violento.

A mayor abundamiento, es de destacar la propuesta implícita contenida en el proyecto de instaurar un procedimiento sumarísimo para cuya tramitación deben regir en plenitud los principios de inmediación, concentración y celeridad.

Otro acierto de este proyecto, de mayúscula importancia, es que permite a las víctimas no sólo pedir al juez auxilio para que ordene las medidas inmediatas necesarias para que hagan cesar el acto violento sino también para que disponga la intervención de personas especializadas con el objeto de que éstas se ocupen del problema, procurando erradicar las causas de fondo que lo originan.

Es por ello que en el artículo 3º se dispone que el juez requiera un diagnóstico de "interacción familiar efectuado por peritos de diversas disciplinas, para determinar los daños físicos y psíquicos sufridos por las víctimas, la situación de peligro y el medio social y ambiental de la familia".

Con los informes de peritos especializados, el juez contará con los instrumentos adecuados para adoptar las medidas conducentes a superar o a controlar el problema familiar puesto a su consideración.

Es también importante destacar que, en su artículo 5º, este proyecto impone al juez el deber de convocar a las partes a una audiencia de mediación, durante cuyo transcurso debe instar a las mismas y al grupo familiar a asistir a programas educativos o terapéuticos, orientados a la





pacho, en nombre de nuestro bloque adelanto el voto favorable tanto en general como en particular.

**Sr. Presidente (Menem).** — Tiene la palabra el señor senador por el Chubut, bancada radical.

**Sr. Solari Yrigoyen.** — Señor presidente: nosotros vamos a apoyar este proyecto porque nos interesa que haya una ley sobre una materia tan importante que presenta hasta el momento una suerte de vacío legal.

Pero en virtud de que han habido otros proyectos presentados, por ejemplo el S.-303/94, del que soy autor, el S.-453/94 del señor senador de la Rúa, y otro que incluye un tema afín — aunque no exactamente el mismo, ya que se refiere al amparo familiar — del que es autor el señor senador Figueroa, solicito que en el Diario de Sesiones figuren como antecedentes los respectivos proyectos que acabo de mencionar, con sus fundamentos. De esta manera abreviamos el debate en este momento y en el Diario de Sesiones constarán con toda precisión nuestros puntos de vista y nuestros enfoques con relación a este tema respecto del cual, como se ha dicho acá, tendremos que seguir trabajando.

Entonces, señor presidente, en virtud de que no hay orden del día, es que hago esta proposición concreta.

**Sr. Presidente (Menem).** — Tiene la palabra el señor senador por Jujuy.

**Sr. Cabana.** — Señor presidente: me permito aclarar al señor senador que tenemos orden del día con número, pero no se encuentra impreso. Por eso, de la comisión enviamos copia del dictamen para que los señores senadores la tengan en las bancas.

**Sr. Solari Yrigoyen.** — ¿Me permite, señor senador?

**Sr. Cabana.** — Sí, señor senador.

**Sr. Solari Yrigoyen.** — Creo que técnicamente tenemos dictamen de comisión, pero no orden del día, porque ha faltado tiempo para imprimirlo.

Si hubiera orden del día, se transcribiría en el Diario de Sesiones el contenido completo de su texto. Y justamente a esa situación responde mi pedido para que obremos como si hubiera orden del día.

**Sr. Presidente (Menem).** — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

— La votación resulta afirmativa.

En particular es igualmente afirmativa.

**Sr. Presidente (Menem).** — Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán las comunicaciones correspondientes.

60

## CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO

**Sr. Presidente (Menem).** — Corresponde considerar el proyecto de ley en revisión contenido en el expediente S.-57/94, por el que se crean dos salas en la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.

**Sr. Secretario (PiuZZi).** — Secretaría informa que en el día de la fecha ha ingresado dictamen de las comisiones de Interior y Justicia y de Presupuesto y Hacienda.

**Sr. Aguirre Lanari.** — Pido la palabra.

**Sr. Presidente (Menem).** — Tiene la palabra el señor senador por Corrientes.

**Sr. Aguirre Lanari.** — Tal como lo anticipé anteriormente, solicito el tratamiento sobre tablas.

**Sr. Presidente (Menem).** — En consideración la moción de tratamiento sobre tablas formulada por el señor senador por Corrientes.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

— La votación resulta afirmativa.

**Sr. Presidente (Menem).** — Por Secretaría se dará lectura.

**Sr. Secretario (PiuZZi).** — (Lee)

### Dictamen de comisiones

#### Honorable Senado:

Vuestras comisiones de Interior y Justicia y de Presupuesto y Hacienda han considerado el proyecto de ley venido en revisión (C.D.-57/94) creando dos salas en la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo; y, por las razones que dará el miembro informante os aconsejan la aprobación del siguiente

### PROYECTO DE LEY

#### El Senado y Cámara de Diputados, etc.

**Artículo 1º** — Créanse dos salas en la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, las que contarán con igual número de magistrados, funcionarios y empleados que las ya existentes.

**Art. 2º** — La presente ley se implementará una vez que se cuente con el crédito presupuestario necesario para la atención del gasto que su objeto demande, el que se imputará al presupuesto del Poder Judicial de la Nación.

**Art. 3º** — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

47

**Subsidio para la "Fundación Cuyo"**

—El texto de la comunicación aprobada es el que figura en la página 5106.

48

**Aumento de los controles a los productos alimenticios**

—El texto de la comunicación aprobada es el que figura en la página 5107.

49

**Fondo de Emergencia Agropecuaria**

—El texto del proyecto de ley definitivamente sancionado es el que figura en la página 5108.

50

**Emergencia sanitaria, agropecuaria y habitacional en el Chaco**

—El texto de resolución aprobada es el que figura en la página 5108.

51

**Protección contra la violencia familiar**

—El texto del proyecto de ley definitivamente sancionado es el que figura en la página 5110.

52

**Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo**

—El texto del proyecto de ley aprobado es el que figura en la página 5120.

53

**Incidentes con periodistas**

—El texto de la declaración aprobada es el que figura en la página 5125.

54

**Monumento a Carlos Gardel**

—El texto del proyecto de ley aprobado es el que figura en la página 5133.

**II****INSERCIÓN****Solicitada por el señor senador Solari Yrigoyen****PROYECTO DE LEY**

*El Senado y Cámara de Diputados,...*

**Violencia familiar**

Artículo 1º — Toda persona que sufre lesiones leves o maltrato físico o psíquico por parte de alguno de los integrantes del grupo familiar conviviente, podrá denunciar los hechos por ante los tribunales de familia. En los lugares donde aún no existan, la competencia para el juzgamiento de los hechos pasará a los tribunales civiles y a los de familia a partir del momento de su creación.

Cuando los damnificados fuesen menores de edad, incapaces, ancianos o discapacitados, los hechos deberán ser denunciados por el Ministerio Público de menores, por servicios asistenciales, sociales y educativos y por ser profesionales de la salud, cuando existieran sospechas serias de que el menor, incapaz, anciano o discapacitado, ha sido objeto de malos tratos dentro del grupo familiar conviviente.

En caso de omisión de denuncia los profesionales antes mencionados serán pasibles de las sanciones que prevé el Código Penal.

Art. 2º — La presentación podrá hacerse en forma escrita o verbal, con o sin patrocinio letrado. Para la sustanciación del proceso, las partes deberán tener asistencia letrada. Si alguna de las partes carece de recursos se dará intervención al señor asesor de pobres y ausentes. Igualmente intervendrá dicho funcionario si el damnificado fuere un menor que carece de representante legal o éste fuere el presunto agresor. En su pre-

sentación, el interesado podrá peticionar todas las medidas precautorias y provisorias de urgencia conexas con el hecho de violencia denunciado: exclusión del hogar, reintegro al mismo, alimentos, tenencia de hijos, régimen de visitas, etcétera.

**Disposiciones de carácter personal**

Art. 3º — El procedimiento será sumarisimo y de carácter oral. El juez fijará una audiencia, que tomará personalmente, dentro de las 48 (cuarenta y ocho) horas de conocer los hechos. Citará al damnificado y al presunto autor o autores quienes estarán obligados a comparecer bajo apercibimiento de ser traídos por la fuerza pública, siendo pasibles de las sanciones disciplinarias que fije el tribunal. Si el damnificado fuera menor, incapaz, anciano o discapacitado, su comparencia quedará librada al criterio judicial. En dicha audiencia el juez ordenará las medidas provisorias y precautorias que fueran pertinentes. Si los hechos aducidos fuesen controvertidos, las partes deberán ofrecer la prueba que hace a su derecho en dicho acto o dentro de los tres días de realizada la audiencia, la que tendrá que ser producida en el término de 15 (quince) días.

En la misma audiencia se requerirá un diagnóstico de la interacción familiar por un equipo interdisciplinario que el juez designará de oficio se acudirá a los grupos de apoyo creados al efecto. También podrán las partes proponer otros informes técnicos. El juez evaluará los daños físicos y psíquicos sufridos por el damnificado, la situación de peligro en que se encuentra, el medio social y ambiental de la familia y las características de su funcionamiento. Para estas evaluaciones se valdrá de los informes de expertos en las distintas áreas.

Art. 4° — Dentro de los quince (15) días fijados para la producción de la prueba el juez fijará una audiencia para que declaren los testigos propuestos, se produzca la prueba confesional y las partes formulen observaciones a las pericias, las cuales deberán ser presentadas con una antelación de 3 (tres) días a la fecha fijada para la audiencia. Las observaciones formuladas a las pericias presentadas se contestarán en el mismo acto de la audiencia por la contraparte y los peritos. Las actuaciones de pruebas producidas serán igualmente incorporadas al debate. Si por razones de tiempo, la producción de la prueba no terminase en dicha audiencia, se señalarán audiencias en días sucesivos hasta su total producción.

Art. 5° — El juez tendrá amplias facultades ordenatorias e instructorias, pudiendo disponer las medidas que fueren necesarias para indagar los sucesos, ubicar el paradero del o de los presuntos autores y proteger a quienes corran el riesgo de ser víctimas de nuevos actos de violencia.

Art. 6° — Regirá el principio de amplia libertad probatoria para acreditar los hechos denunciados, evaluándose las pruebas ofrecidas de acuerdo a los principios de libre convicción y sana crítica. Se considerarán las presunciones que contribuyan a la demostración de los hechos, siempre que sean indicios graves, precisos y concordantes.

Art. 7° — Acreditada la verosimilitud de los hechos, el juez podrá adoptar las siguientes medidas provisionales y precautorias concordantes a los hechos denunciados:

- a) Ordenar la exclusión del autor o autores, de la vivienda donde habita el grupo familiar, si halla que la continuación de la convivencia significa un riesgo para la integridad física y psíquica de alguno de sus integrantes. La duración de la medida la determinará el juez según la circunstancia del caso;
- b) Con el objeto de evitar repetición de los actos de violencia, el juez podrá prohibir el acceso del imputado o imputados al domicilio de quien fue víctima de los hechos denunciados, como igualmente a los lugares de trabajo o estudio del afectado. Podrá igualmente, a petición de parte, prohibir al autor o autores la realización de actos de perturbación o intimidación a alguno de los integrantes del grupo familiar conviviente. El juez establecerá la duración de la medida dispuesta de acuerdo a los antecedentes de la causa;
- c) Podrá también el tribunal decidir el reintegro al domicilio a petición de quien ha debido salir del mismo por razones de seguridad personal, excluyendo en tal caso de dicha vivienda al agresor;
- d) Deberá fijar una cuota alimentaria provisoria, si correspondiese, de acuerdo a los medios del alimentante y en caso de desacuerdo de las partes;
- e) Establecerá el régimen provisorio de tenencia de hijos y visitas si correspondiese y conforme a las reglas legales ya establecidas. El juez procurará que las partes arriben a un acuerdo sobre las cuestiones precedentemente indicadas y para ello se valdrá de terapeutas familiares y/o de expertos que se consideren necesarios, quienes intervendrán en las gestiones de mediación;

f) En caso de que el damnificado fuese un menor, incapaz, anciano o discapacitado, el juez puede otorgar la guarda protectora del mismo a quien considere idóneo para tal función, si esta medida fuere necesaria para la seguridad psíquica del damnificado y hasta tanto se efectúe un diagnóstico de la situación. Igualmente tomará los recaudos indispensables para preservar la salud psíquica del menor, incapaz, anciano o discapacitado. Esta atribución del magistrado no deroga las facultades que la ley 10.903, artículo 14, otorga a los jueces penales, para el supuesto de que los hechos fuesen investigados en el ámbito penal.

Art. 8° — Ante la comprobación de los hechos denunciados o el incumplimiento de la órdenes emitidas y previa audiencia con el infractor o infractores, el juez adoptará alguna o varias de las siguientes sanciones alternativas, según las circunstancias del caso:

- a) Asistencia obligatoria del agresor a programas educativos o terapéuticos por el tiempo y el modo que definan los expertos. Si el juez lo estima conveniente, podrá indicar el tratamiento terapéutico del grupo familiar conviviente;
- b) Multas pecuniarias, a favor de la víctima y su grupo familiar;
- c) Realización de los trabajos comunitarios.

Art. 9° — Durante el transcurso de la causa y después de la misma, juntamente con la sentencia, el juez deberá controlar las medidas y decisiones adoptadas por el tiempo que juzgue conveniente. A tales efectos designará el organismo público o privado encargado de realizar la gestión.

Sus profesionales informarán acerca de la marcha del funcionamiento familiar, en forma trimestral al juzgado.

Art. 10. — La parte damnificada podrá reclamar en este proceso la reparación civil por los daños y perjuicios ocasionados según las normas comunes que rigen la materia.

Art. 11. — El procedimiento será reservado salvo para las partes, letrados y expertos intervinientes. Las audiencias también serán privadas.

Art. 12. — Los jueces podrán solicitar la colaboración de todas las organizaciones o entidades públicas o privadas dedicadas a la protección de los menores, las mujeres, los discapacitados y las familias y los ancianos, a los efectos de que brinden asistencia a las personas afectadas por los hechos denunciados.

Art. 13. — Las cámaras de apelaciones en lo civil llevarán estadísticas sociodemográficas de las partes, naturaleza de los hechos y resultados de las medidas adoptadas. Asimismo, los juzgados que intervinieren en los casos de violencia familiar, deberán remitir a las cámaras civiles, los datos personales de identificación de victimarios y víctimas, a fin de que esa información sea requerida cada vez que la Justicia se aboque a estas situaciones.

Art. 14. — En todo lo que no estuviese previsto por la presente ley, regirán las normas del Código de Procedimientos en materia civil y comercial de las jurisdicciones respectivas.



### *Disposiciones de carácter general*

Art. 15. — En los casos mencionados en el artículo 7º, inciso c) el damnificado y/o grupo familiar serán alojados en hogares de tránsito, con el objeto de brindarles albergue, alimentos, protección, asistencia médica y psicológica por todo el tiempo que dure la medida.

Art. 16. — Los hogares de tránsito, asistencia, protección y defensa de la mujer, contarán con personal especializado en derecho, asistencia social, medicina, sociología, relaciones humanas y psicología.

Se realizarán acuerdos entre el gobierno nacional, provincial, municipal y territorio federal a fin de determinar qué lugares serán afectados a este fin.

Art. 17. — La Secretaría de Desarrollo de la Persona elaborará convenios con asociaciones civiles y religiosas, así como entidades intermedias de bien público a los efectos de participar en los aspectos de la política de asistencia, protección, defensa y seguimiento del problema.

Art. 18. — Los gastos que demande la creación de estos hogares, en lo sucesivo se cubrirán con las partidas que se incluirán en la Ley de Presupuesto y que se distribuirán de acuerdo al modo que se acuerde con las provincias para la concreción de estos programas.

Art. 19. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

*Fernando de la Rúa.*

### FUNDAMENTOS

Señor presidente:

El tema de la violencia familiar, ya sea física o moral, es un tema de antigua data tanto en nuestra sociedad como en el resto del mundo.

Hay creencias culturales que avalan la "invisibilidad" de la violencia a la par que muchas mujeres aceptan como "natural" el golpe o la sanción por parte de sus maridos o compañeros.

Sin embargo, la violencia se manifiesta muchas veces en forma silente. La inexpresividad emocional, la baja autoestima, la escasa habilidad para la comunicación verbal, la minimización de la conducta violenta, la proyección de la responsabilidad y la culpa son rasgos comunes en los golpeadores.

Entre los mitos incorporados a nuestra cultura podemos mencionar:

1. Solamente existe violencia familiar en los estratos sociales más pobres y marginales. La realidad es que hay violencia en todas las clases sociales y económicas.

2. A las mujeres les gusta que les peguen y por eso se quedan con el compañero golpeador. En realidad, la mayoría de las mujeres no abandonan al golpeador porque al principio de la relación violenta creen que lograrán que cambie de actitud, si ellas le demuestran su amor verdadero, luego se quedan por el temor a perder su vida, sus hijos y por la falta de posibilidades económicas.

3. Las mujeres golpeadas no deben denunciar a sus maridos porque "la familia es lo primero".

4. Los golpeadores son borrachos y/o enfermos. No todos los alcohólicos maltratan a sus mujeres y es mucho mayor la proporción de los que golpean sobrios, ya que cualquier excusa es válida para comenzar a pegar o insultar.

5. "El matrimonio no es un lecho de rosas."

Por estas razones consideramos que no se invade la intimidad familiar protegiéndola de los hechos de violencia que pueden darse en su seno.

El sistema judicial contribuye a enraizar estas creencias ya que los jueces actuando de un modo "paternalista", frente a una situación de esta índole pretenden "arreglar" a las partes, aconsejándoles que no se peleen más, lo cual si bien es una loable actitud no resuelve el problema.

Hemos considerado como base de este trabajo una propuesta de la doctora Cecilia Grossman, cuyo objetivo principal fue adaptar la legislación vigente a la ley 23.179 que ratificó la Convención de las Naciones Unidas contra Toda Forma de Discriminación contra la Mujer.

El objetivo principal de esta propuesta es otorgar un camino civil para los casos de lesiones leves, sin perjuicio que a la víctima le quedará siempre la posibilidad de la acción penal si ésa fuera su decisión. Sin embargo, el sistema penal demostró ser insuficiente y hasta perjudicial en su aplicación; el mismo se encuentra limitado por los "tipos", con lo cual la lesión denunciada deberá ser demostrada en forma fehaciente, circunstancia que en los casos de la violencia moral escapan al ámbito probatorio tradicional.

En cuanto a las consecuencias, la familia podrá encontrarse sin sustento por un tiempo determinado o bien las represalias que el agresor tome contra su compañera pueden llegar a ocasionar daños mayores.

No sólo buscamos poner un remedio a la agresión ya existente, sino también pretendemos brindar tratamiento al agresor a fin de recuperar la estabilidad familiar.

Hemos optado por un proceso sumarísimo por considerar que la justicia frente a una denuncia concreta de violencia debe actuar con la mayor celeridad posible a fin de encontrar pronta solución a un conflicto que, dada su gravedad, no admite dilaciones. A los mismos fines el juez tendrá amplias facultades instructorias y ordenatorias según los principios de la libre convicción y sana crítica.

Una vez denunciado el hecho, el juez decidirá si la víctima permanece o no en su hogar. Es necesario facultar al juez en esta opción debido a que en muchas circunstancias puede resultar difícil excluir al agresor del hogar, sobre todo cuando éste es de su propiedad.

La presente medida debe necesariamente ser compatibilizada con disposiciones preventivas, tales como la creación de hogares de tránsito con el fin de atender las necesidades más urgentes, ya que la unión de estos programas dará mayor respuesta a nuestra realidad socioeconómica. De nada servirá obtener una normativa sobre violencia doméstica si luego la misma se tornara de imposible cumplimiento, cuando frente a la situación concreta la víctima no tiene ni albergue ni asistencia. A tal fin, resulta imperioso modificar la ley 23.515 en cuanto a la materia alimentaria se refiere.

Desde otro punto de vista, el servicio telefónico permanente constituye un importante abordaje para atender situaciones de crisis cuando la víctima aún no ha decidido formalizar la denuncia. En esa circunstancia se trata

de crear una atmósfera de sinceridad y respeto donde se escucha a la demandante al tiempo que se trata de transmitirle algunas ideas centrales, tales como: ella no es responsable de la conducta de su compañero, que no es la única a quien le sucede y que no es un problema privado sino que pertenece al ámbito de lo público. Es importante que sepa que el maltrato es un delito.

En relación a la legislación extranjera se ha considerado, entre otras, a la ley de Ohio (USA) de 1979; ley de Irlanda de 1976; ley de los tribunales de familia del estado de Nueva York, reformada en 1986; declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso del poder (aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1985); VII Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente (1985, Milán, Italia); VIII Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente (La Habana, 27 de agosto al 7 de septiembre de 1990).

Asimismo, y revisando la legislación latinoamericana consultada, hemos observado un vacío legislativo común, ya que, por ejemplo, países tales como Brasil, Cuba, República Dominicana, El Salvador, Chile, Honduras, Panamá, Perú, Uruguay y Venezuela, contemplan la violencia sólo en referencia al menor y como delito del derecho penal. Cuba lo legisla en el Código de Defensa Social de 1936 (sustracción, abandono, maltrato de menores incapacitados y desvalidos). Chile lo legisla en el Código Penal con algunas normas en el Código Civil, pero sin hacer mención específica alguna. República Dominicana lo regula en el Código Penal. El Salvador en el Código Penal como delitos contra la asistencia familiar (sólo contempla la violencia al menor). Panamá, también en el Código Penal en el título de abuso en la corrección de subordinados y malos tratos a la familia respecto del menor. Perú en el Código Penal referido al menor. Uruguay en el Código Penal referido al menor. Uruguay en el Código del Niño. Venezuela tiene un título en el Código Penal que regula las costumbres y buen orden de la familia (capítulo de corrupción y ultrajes al honor, etcétera).

Desde otro punto de vista, Italia lo regula en el Código Penal como abuso al poder de corrección o disciplina. España lo regula en el Código Civil de 1972 como causa legítima de separación y en el Código Penal como agravantes para los ascendientes, hermanos naturales legítimos y adoptivos y descendientes.

La dignidad y respeto es un derecho inalienable de la persona. Todo individuo debe tener la posibilidad de vivir en una familia armónica y ser amado y valorado. Paralelamente a ello, consideramos que el agresor también tiene derecho a ser asistido y recuperado, a fin de volver a ocupar un lugar en su hogar, siempre que ello fuese posible.

Por estos motivos recomendamos la sanción de esta ley que representa una herramienta eficaz en el encuadre de esta problemática, siempre que contemos con la ayuda de toda la comunidad.

*Fernando de la Rúa.*

— A las comisiones de Familia y Minoridad y de Asuntos Penales y Regímenes Carcelarios.

## PROYECTO DE LEY

### *El Senado y Cámara de Diputados, ...*

#### **Ley nacional sobre violencia doméstica**

Artículo 1º — Toda persona que sufriese lesiones leves o maltrato físico o psíquico por parte de algunos de los integrantes del grupo familiar conviviente, podrá denunciar los hechos al juez en lo civil o ante los tribunales de familia si ya funcionaren en la jurisdicción correspondiente a su domicilio. En los lugares donde aún no existan, la competencia para el juzgamiento de estos hechos pasará a los Tribunales de Familia a partir del momento de su creación. Cuando las víctimas fuesen menores de edad o incapaces, los hechos podrán ser denunciados por el Ministerio Público de Menores, por servicios asistenciales, sociales y educativos y por profesionales de la salud cuando existieran sospechas serias de que el menor o incapaz ha sido objeto de malos tratos dentro del grupo familiar conviviente.

Art. 2º — La presentación podrá hacerse en forma escrita o verbal, con o sin patrocinio letrado. Para la sustanciación del proceso, las partes deberán tener asistencia letrada. Si alguna de las partes carece de recursos se le designará un abogado patrocinante de oficio. Igualmente se hará dicha designación si la víctima fuera un menor que carece de representante legal o éste fuese el imputado. Las funciones de patrocinio indicadas estarán a cargo de los funcionarios que a tal efecto ya operasen en las distintas jurisdicciones o pudiesen instituirse en el futuro. En el escrito inicial, el interesado podrá peticionar todas las medidas cautelares de urgencia conexas con el hecho de violencia denunciado: exclusión del hogar, reintegro al mismo, alimentos, tenencia de hijos, régimen de visitas.

Art. 3º — El procedimiento será sumarisimo y de carácter oral. El juez fijará una audiencia, que tomará personalmente, dentro de las 48 horas de conocer los hechos. Citará a la víctima y al presunto autor quienes están obligados a comparecer bajo apercibimiento de ser traídos por la fuerza pública, siendo pasibles de las sanciones disciplinarias que juzgue el tribunal. En dicha audiencia el juez ordenará las medidas precautorias que fueren pertinentes. Si los hechos aducidos fuesen controvertidos, las partes deberán ofrecer la prueba que hace a su derecho en dicho acto o dentro de los tres días de realizada la audiencia, la que tendrá que ser producida en el término de (15) quince días. El juez fijará dentro de dicho plazo una audiencia para que declaren los testigos propuestos, se produzca la prueba confesional y las partes formulen observaciones a las pericias, las cuales deberán ser presentadas con una antelación de tres días a la fecha fijada para la audiencia. Las observaciones formuladas a las pericias presentadas se contestarán en el mismo acto de la audiencia por la contraparte y los peritos. Las actuaciones de prueba producidas serán igualmente incorporadas al debate. Si por razones de tiempo, la producción de la prueba no terminase en dicha audiencia, se señalarán audiencias en días sucesivos hasta su total producción.

Art. 4º — En todos los casos el juzgado requerirá un diagnóstico de la interacción familiar por un psicólogo especializado que el juez designará de oficio, pudiendo también el magistrado o las partes solicitar otros informes técnicos. El juez establecerá los daños físicos o

psíquicos sufridos por la víctima; la situación de peligro en que se encuentra; al medio social y ambiental de la familia y las características de su funcionamiento. Para estas evaluaciones se valdrá de los informes de expertos en las distintas áreas.

Art. 5º — El juez tendrá amplias facultades ordenatorias e introductorias, pudiendo disponer las medidas que fueren necesarias para indagar los sucesos, ubicar el paradero del acusado y proteger a quienes corran el riesgo de ser víctimas de nuevos actos de violencia.

Art. 6º — Regirá el principio de amplia libertad probatoria para acreditar los hechos denunciados, evaluándose las pruebas ofrecidas de acuerdo a los principios de libre convicción y sana crítica. Se considerarán las presunciones que contribuyan a la demostración de los hechos, siempre que sean indicios graves, precisos y concordantes.

Art. 7º — El juez podrá adoptar las siguientes medidas provisionarias conexas con la situación denunciada si se ha acreditado la verosimilitud de los actos de violencia denunciados:

- a) Ordenar la exclusión del autor de la vivienda donde habita el grupo familiar si halla que la continuación de la convivencia significa un riesgo para la integridad física y psíquica de algunos de sus integrantes. La duración de la medida la determinará el juez según las circunstancias del caso;
- b) Con el objeto de evitar la repetición de los actos de violencia, el juez podrá prohibir el acceso del imputado al domicilio de quien fue víctima de los hechos denunciados, como igualmente a los lugares de trabajo o estudio del afectado. Podrá igualmente, a petición de parte, prohibir que el autor realice actos de perturbación o intimidación a alguno de los integrantes del grupo familiar conviviente. El juez establecerá la duración de la medida dispuesta de acuerdo a los antecedentes de la causa;
- c) Podrá también el tribunal decidir el reintegro al domicilio a petición de quien ha debido salir del mismo por razones de seguridad personal, excluyendo en tal caso de dicha vivienda al agresor;
- d) Fijará una cuota alimentaria provisoria, si correspondiese, de acuerdo a los antecedentes obrantes en la causa y según las normas que rigen la materia, si no hay acuerdo de las partes;
- e) Establecerá el régimen provisorio de tenencia de hijos y visitas si correspondiese y conforme a las reglas legales ya establecidas. El juez procurará que las partes arriben a un acuerdo sobre las cuestiones precedentemente indicadas y para ello se valdrá de terapeutas familiares o expertos que se consideren necesarios, quienes intervendrán en las gestiones de mediación;
- f) En caso de que la víctima fuese un menor o incapaz, el juez puede otorgar la guarda protectora del menor a quien considere idóneo para tal función, si esta medida fuera necesaria para la seguridad psicofísica del menor y hasta tanto se efectúe un diagnóstico de la situación. Igualmente tomará los recaudos indispensables para preservar la salud psicofísica del menor. Esta

atribución del magistrado no deroga las facultades que el artículo 14 de la ley 10.903 otorga a los jueces penales, para el supuesto de que los hechos fuesen investigados en el ámbito penal.

Art. 8º — Ante la comprobación de los hechos denunciados o el incumplimiento de las órdenes emitidas y previa audiencia con el infractor, el juez adoptará algunas o varias de las siguientes sanciones alternativas, según las circunstancias del caso:

- a) Amonestación o represión por el acto cometido. Si los hechos denunciados vuelven a reiterarse, el juez podrá aplicar alguna de las otras sanciones que se prevén en esta ley;
- b) Multas pecuniarias a favor de la víctima;
- c) Asistencia obligatoria del imputado a programas educativos o terapéuticos por el tiempo y el medio que definan los expertos.

Art. 9º — Durante el transcurso de la causa y después de la misma por el tiempo que se juzgue prudente, el juez deberá controlar el resultado de las medidas y decisiones adoptadas, ya sea a través de la comparecencia de las partes al tribunal con la frecuencia que se ordene o bien mediante la intervención de asistentes sociales quienes darán informes periódicos acerca del desenvolvimiento familiar.

Art. 10. — La parte damnificada podrá reclamar en este proceso la reparación civil por los daños y perjuicios ocasionados según las normas comunes que rigen la materia.

Art. 11. — Si la víctima optase por este recurso, no podrá promover la acción penal. En todos los supuestos en que de los hechos investigados resultase otro delito que no fuese el de lesiones leves, se remitirán las actuaciones a la justicia penal. El interesado, en los casos en que el hecho sea juzgado por la justicia penal, puede peticionar en esta instancia las medidas provisionarias que prevé la presente ley. Los funcionarios policiales, como asimismo los organismos o instituciones a los cuales acudan las personas afectadas, tienen la obligación de informar sobre los recursos legales existentes frente a los actos de violencia doméstica.

Art. 12. — Los antecedentes y documentación correspondiente a los procedimientos se mantendrán en reserva, salvo para las partes, letrados y expertos intervinientes. Las audiencias serán privadas.

Art. 13. — Los jueces podrán solicitar la colaboración de todas las organizaciones o entidades públicas o privadas dedicadas a la protección de los menores, las mujeres y las familias a los efectos de que brinden asistencia a las personas afectadas por los hechos denunciados.

Art. 14. — La Cámara Nacional en lo Civil o el organismo centralizador de los Tribunales de Familia donde éstas funcionaren, llevarán estadísticas de los casos presentados, características sociodemográficas de las partes, naturaleza de los hechos y resultados de las medidas adoptadas.

Art. 15. — En todo lo que no estuviese previsto por la presente ley, regirán las normas del Código de Procedimientos en Materia Civil y Comercial de las jurisdicciones respectivas.

Art. 16. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

*Hipólito Solari Yrigoyen.*



## FUNDAMENTOS

Señor presidente:

El proyecto de ley sobre violencia doméstica que elevo a consideración del Honorable Senado reproduce una iniciativa del senador radical doctor Luis Agustín J. Brasesco (expediente S.-311), presentada el 12 de julio de 1988 y sancionada por unanimidad por este alto cuerpo legislativo. La falta de tratamiento oportuno por la Honorable Cámara de Diputados determinó su caducidad en los términos de las leyes 13.640 y 23.821.

La necesidad de contar en nuestra legislación civil con un recurso especial para afrontar los actos de violencia doméstica, me ha determinado a insistir en la sanción de este meritorio proyecto legislativo.

Entre los antecedentes del proyecto se cuentan las recomendaciones del VII Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, las recomendaciones del Consejo de Europa del 26 de marzo de 1985 y diversas propuestas y lineamientos de acción elaborados en el país, entre ellos, los diferentes proyectos de creación de tribunales de familia y las conclusiones de una investigación realizada en el marco del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas por un equipo de trabajo dirigido por la doctora Cecilia P. Grosman.

En relación a la legislación extranjera se han considerado, entre otras, a la Ley de Ohio, USA de 1979; la Ley Inglesa (Domestic Violence and Matrimonial Proceedings Act); Ley de Irlanda de 1976 y la Ley de los Tribunales de Familia del Estado de Nueva York reformada en 1986.

El ordenamiento que se propone tiene como objetivo actuar contra la indivisibilidad del fenómeno para prevenirlo a facilitar su tratamiento. Sabido es que los casos denunciados a las autoridades policiales son mínimos en relación a la magnitud del fenómeno y muchos menos son los hechos que llegan a la instancia penal ya que son múltiples las razones que conducen a la pasividad de la víctima. Esta, por otra parte, desiste con frecuencia de la acción emprendida, porque más que la condena busca amparo y aspira a un cambio de comportamiento del agresor.

La vía del procedimiento penal ha demostrado ser insuficiente para prevenir y actuar contra los hechos abusivos en el seno de la familia. Las normas penales no son efectivas en estos casos, ya que si bien no se legitiman en la práctica las conductas violentas, diversos supuestos subyacentes que pesan sobre el juez, paralizan su acción. Aunque el camino legal que se propone no excluye la posibilidad de iniciar las acciones penales comunes frente a las conductas típicas de un delito, se abre un nuevo mecanismo judicial para los actos violentos de menor gravedad que constituyen los casos más frecuentes en el ámbito familiar.

Una intervención civil puede provocar una mayor iniciativa para poner en evidencia los hechos violentos, lo cual permitirá que la justicia, como una de las formas de

justicia se ha orientado con este proyecto, dentro de una dimensión no represora, a obtener protección y asistencia al grupo familiar.

Desde luego, para evitar un doble juzgamiento de los hechos y la posibilidad de sentencias contradictorias, el interesado deberá optar por alguna de las dos vías, civil o penal, aun cuando siempre podrá peticionar en la instancia civil las medidas provisionales que se prevén en el presente proyecto de ley.

Este recurso legal, destinado a ser empleado en una situación crítica, debe ir acompañado de la creación de mecanismos comunitarios que prevengan la aparición del fenómeno violento desde su faz más temprana.

Por otra parte, es indudable la conveniencia de que todos los problemas familiares derivados de los actos de violencia doméstica, exclusión de la vivienda, reintegro a la misma, alimentos, tenencia, sean tratados por un mismo juez.

El proyecto no sólo contempla los actos de fuerza que provocan las lesiones mencionadas por el Código Penal, sino también diversas formas de violencia, coerción o intimidación que producen sufrimientos a la víctima y afectan la calidad de vida de la familia. Sólo considera las lesiones leves que son los supuestos de mayor frecuencia. Los delitos más graves serán juzgados exclusivamente por el juez penal, sin perjuicio de que el interesado peticione las medidas precautorias que se prevén en esta ley.

El proyecto tiene la intención de proteger a todos los integrantes del grupo familiar a través de un procedimiento oral y sumarísimo pues se trata de problemas que la sociedad debe resolver con celeridad y con el ánimo de componer, si fuese posible, el conflicto de la familia. Es necesario que los hechos sean juzgados por Tribunales de Familia. La existencia de equipos de expertos que integrarían su estructura permitirá afrontar estas situaciones mediante un enfoque terapéutico, afirmándose al mismo tiempo la responsabilidad del imputado.

Resulta indispensable, además, introducir en nuestra legislación medidas protectoras de carácter urgente que posibiliten la interrupción del ciclo de la violencia.

De tal manera, esta iniciativa se inscribe en el marco más amplio de la protección de los derechos humanos en el seno de la familia. Por ello, puede afirmarse que este proyecto de ley cumple con el propósito de adaptar la legislación vigente a la ley 23.179, esto es, la ratificación de la Convención de Naciones Unidas contra toda forma de discriminación contra la mujer.

Al dar por reproducido este proyecto de ley debo destacar que el mismo es el resultado de un trabajo de calificados especialistas y que forma parte de la fecunda labor parlamentaria del colega y amigo, don Luis Agustín J. Brasesco, cuyo reconocimiento me honro en celebrar con esta iniciativa, tan cara a nuestra lucha por la defensa y promoción de los derechos humanos.

*Hipólito Solari Yrigoyen.*

—A las comisiones de Asuntos Penales y Regímenes Carcelarios y de Familia y Minoridad.